

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y TRÁMITE DE DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, EN RELACIÓN CON LA DENUNCIA NÚMERO DEN-PP-018/07 PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR LA COMISIÓN DE DIVERSOS ACTOS RELACIONADOS CON CAMPAÑAS ELECTORALES.

A N T E C E D E N T E S

I.- En sesión ordinaria de fecha veintiocho de febrero de dos mil siete, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado mediante el acuerdo número CG/AC-002/07, aprobó la creación de la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias de este Organismo Electoral.

II.- En sesión ordinaria de fecha seis de marzo de dos mil siete, la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias de este Organismo Electoral nombró a la Maestra en Derecho Rosalba Velázquez Peñarrieta y al Maestro José Joel Paredes Olguín, como Presidenta y Secretario de dicho Órgano Auxiliar del Consejo General, respectivamente.

III.- En sesión ordinaria de fecha quince de marzo del año en curso, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, mediante acuerdo CG/AC-004/07 declaró el inicio del Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil siete, convocando a elecciones ordinarias para renovar a los integrantes del Poder Legislativo y a los Miembros de los Ayuntamientos de la Entidad.

IV.- En sesión ordinaria de fecha diecisiete de agosto del año dos mil siete, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó mediante el acuerdo CG/AC-073/07 el Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado estableciéndose en la citada reglamentación las normas que regulan la presentación de las denuncias, así como el Órgano encargado de conocer y substanciar las mismas.

V.- En fecha ocho de octubre de dos mil siete, se presentó en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral un escrito suscrito por el representante propietario del Partido del Trabajo acreditado ante el Consejo General de este

Instituto, Licenciado José Alfonso Rodríguez Periañez, en el que manifestó lo siguiente:

**“LIC. JORGE SÁNCHEZ MORALES
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO
P R E S E N T E**

JOSÉ ALFONSO RODRIGUEZ (SIC) PERIAÑEZ, promoviendo en mi calidad de Representante Propietario del Partido Del Trabajo, personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida ante este Órgano Superior de Dirección que usted dignamente representa y señalando como domicilio para recibir cualquier tipo de notificaciones la casa marcada con el número 908 de la calle 35 poniente de esta Ciudad de Puebla, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que, por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 28 fracciones I y II, 42 fracciones II, X y XII, 226, 227, 229, 230, 232 y 234 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como los numerales 1, 6, 9, 10, 11 y demás disposiciones aplicables del Reglamento para la tramitación de denuncias interpuestas por los partidos políticos y/o coaliciones acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado, en este acto presento formal **DENUNCIA** en contra de Partido Acción Nacional, por considerar que fueron transgredidos y violentados nuestros derechos y garantías institucionales que nos confiere el Código de la Materia, lo anterior se basa en el siguiente punto de hechos.

HECHOS

I.- Que, con fecha cuatro de septiembre del año en curso el Consejo General del Instituto Electoral del Estado concluyó las sesiones especiales por medio del cual aprobó el registro de planillas que reunieron los requisitos establecidos en el Código de la Materia presentadas por los partidos políticos acreditados en el Estado.

II.- Que , el Partido del Trabajo una vez que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó las candidaturas a diferentes cargos de elección popular inició la difusión de su propaganda electoral, con el propósito de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de las de las acciones de este instituto político.

III.- que, con fecha 22 de septiembre de 2007, las brigadas del Partido del Trabajo encargadas de la difusión y colocación de propaganda en su recorrido de rutina en los diferentes puntos de esta ciudad capital, en específico dentro de los límites del Distrito Electoral Uninominal 01, del Estado de Puebla, se percataron que el Partido Acción Nacional, sobre puso propaganda de su Candidato Antonio Sánchez Díaz de Rivera en la propaganda ya fijada con anterioridad por el Partido del Trabajo, transgrediendo lo dispuesto por el artículo 229 del Código Comicial.

DERECHO

1.- Artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 28, fracciones I y II, 42 fracciones II, X y XII, 226, 227, 229, 230, 232 y 234 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

PRUEBAS

I.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la copia de dos placas fotográficas en el que se percibe la superposición de propaganda por parte del Partido Acción Nacional en la propaganda ya fijada por el Partido del Trabajo.

II.- LA PRESUNCIONAL.- Consistente en la deducción que realiza el resolutor partiendo de hechos probados para llegar a la verdad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito muy atentamente a este Cuerpo Colegiado lo siguiente:

PRIMERO.- Se me tenga por presentado el presente escrito en forma legal.

SEGUNDO.- Una vez realizadas las diligencias de ley, solicito a este Consejo General se sancione en términos de la legislación aplicable al Partido Acción Nacional por violentar lo dispuesto en el artículo 229 del Código de la Materia, empañando el buen desarrollo del proceso electoral estatal ordinario de este año.”

VI.- En fecha ocho de octubre de dos mil siete, la Oficialía de Partes del Organismo en comento remitió a la Presidencia de este Instituto Electoral, el escrito de referencia con sus respectivos anexos.

Atento a lo anterior, en fecha diez de octubre de dos mil siete el Consejero Presidente este Instituto Electoral a través del memorandum número IEE/PRE/2276/07 suscrito el día nueve del mismo mes y año, envió a la Secretaría General de este Organismo el escrito de denuncia antes señalado y los documentos que fueron acompañados al mismo, para la substanciación correspondiente.

VII.- En este sentido, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil siete, la Secretaría General de este Instituto en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 8 fracción II del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, tuvo por recibido el escrito de denuncia en mención, así como los anexos acompañados al mismo, otorgándoles el número de expediente DEN-PP-018/07.

VIII.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de octubre de dos mil siete, la Secretaría General declaró procedente el escrito de denuncia presentado por el representante propietario del Partido del Trabajo acreditado ante el Consejo General de este Instituto, Licenciado José Alfonso Rodríguez Periañez, en atención a que el mismo cumplió con los requisitos establecidos en el numeral 10 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, determinando en consecuencia, correr traslado a la parte denunciada con el escrito de denuncia, así como con los documentos que fueron acompañados al mismo, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho e interés conviniera, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se le tendría por contestada en sentido negativo.

En cumplimiento al proveído antes señalado, el Secretario General de este Organismo Electoral mediante el oficio IEE/SG-2634/07 de fecha veinticuatro de octubre del año en curso, notificado el día veintiséis del mismo mes y año, corrió traslado con el escrito de denuncia al representante propietario del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

IX.- En fecha treinta de octubre de dos mil siete, el Secretario General certificó que una vez fenecido el plazo concedido a la parte denunciada mediante el comunicado mencionado en el párrafo que antecede, no se presentó escrito alguno por parte del representante propietario del Partido Acción Nacional, por el que diera contestación a la denuncia materia de este dictamen.

Por tal motivo, mediante acuerdo de fecha tres de noviembre de dos mil siete, la Secretaría General hizo efectivo el apercibimiento realizado al representante propietario del partido político denunciado, teniendo por contestada la denuncia en sentido negativo.

X.- Una vez integrado el expediente con todas las actuaciones debidamente desahogadas en el mismo, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 17 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, mediante el memorandum número IEE/SG-1752/07 de fecha cinco de noviembre del año en curso, el Secretario General remitió el expediente de la denuncia que nos ocupa a esta Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias, para la elaboración del presente dictamen.

C O N S I D E R A N D O

1.- Que, en términos del artículo 41, base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas en las cuales la ley determinará las formas específicas de intervención de los partidos políticos, éstos últimos al ser entidades de interés público tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Asimismo, de conformidad con la base número II del numeral señalado en el párrafo inmediato anterior la ley deberá de garantizar que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades.

En este entendido, en relación con lo anterior el diverso 116 de nuestra Carta Fundamental estableció en su base IV que las Constituciones y leyes de los Estados deben de garantizar que el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones se realicen en apego a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, así como se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; y se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse.

Ante tal virtud, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla dispuso en sus artículos 3 y 4 las bases a través de las cuales se renovarían los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Entidad, definiendo el marco normativo que regulará dichas elecciones, señalando que el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, determinará las etapas del proceso electoral y la forma de participación de los ciudadanos en el mismo. Además, dispondrá los derechos, prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos, así como un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

Al respecto, los artículos 3 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 71 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla establecen que la organización de las elecciones es una función estatal encomendada a un organismo de carácter público y permanente, autónomo e independiente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Instituto Electoral del Estado. El ejercicio de dicha función se rige por los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, tal como se señala en el diverso 8 del Código de la materia.

De igual forma, el artículo 75 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, señala como fines de este Instituto, entre otros, los de vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local, las del Código de la materia y demás ordenamientos, que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos; el de garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y miembros de los Ayuntamientos; y el de asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos y de los partidos políticos vigilando el cumplimiento de sus obligaciones.

Aunado a lo anterior, los artículos 78 y 79 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla refieren que dentro de la estructura central del Instituto, se encuentra el órgano central denominado Consejo General que será el Órgano Superior de Dirección y el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de vigilar que los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia guíen todas las actividades de este Instituto.

Ahora bien, si bien es cierto que la función estatal de organizar las elecciones se encuentra encomendada al Instituto Electoral del Estado el diverso 6 del mencionado Código dispone que los ciudadanos, los partidos políticos y el Congreso del Estado son corresponsables de la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.

En este sentido, al ser los partidos políticos corresponsables de dicha función estatal le son conferidos en términos del artículo 42 del Código Comicial derechos, entre los que se encuentran el de ejercer la corresponsabilidad que la Constitución Federal, la Constitución Local y el Código de la materia les confieren en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; el de gozar de las garantías que Código en cita les otorga para realizar libremente sus actividades; el de disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público, en términos de estas disposiciones; y el de pedir al Consejo General, aportando elementos de prueba, que se investiguen las actividades de otros partidos políticos, cuando incumplan sus obligaciones de manera grave y sistemática.

Tal como se hizo mención, los institutos políticos que participan en la vida política del Estado cuentan con obligaciones que deben de observar en el desarrollo de su función, refiriéndose en el numeral 54 fracción I del Código de la materia que entre dichas obligaciones se encuentra la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas ajustándolas a los principios de representación y democracia; respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos;.

En este entendido, este Instituto como se refirió anteriormente al contar con un Órgano Superior de Dirección que es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de vigilar que los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia guíen todas las actividades de este Instituto, en términos del artículo 89 fracciones II, III, XIX, XXII y LIII del Código en cita se le atribuyeron, entre otras, las siguientes facultades:

- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en Código de la materia;

- Organizar el proceso electoral y vigilar la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto y conocer de los informes específicos y de las actividades que estime necesario solicitarles;
- Revisar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego al Código de la materia y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;
- Investigar por los medios legales pertinentes, cualquier hecho relacionado con el proceso electoral y, de manera especial, los que denuncien los partidos políticos por actos violatorios realizados por las autoridades u otros partidos en contra de su propaganda, candidatos o miembros; y
- Dictar los acuerdos necesarios a fin de cumplir las atribuciones que le confiere el Código Comicial.

Asimismo, tal y como refieren los diversos 392 y 393 del Código en comento el Consejo General conocerá y resolverá, en su caso, de las infracciones o violaciones que a las disposiciones del citado cuerpo legal o acuerdos de los Órganos Electorales cometan los partidos políticos o coaliciones, los que podrán ser sancionados con multa de trescientos a cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado, debiendo comunicar para tal efecto al Tribunal Electoral del Estado de Puebla los acuerdos y resoluciones tomadas sobre las irregularidades en que hayan incurrido los partidos políticos o coaliciones.

Bajo este contexto, tomando en consideración los preceptos legales mencionados en el cuerpo del presente dictamen se advierte que el Consejo General de este Instituto cuenta con facultades expresas para vigilar que las actividades de los partidos políticos o coaliciones se desarrollen con apego al Código de la materia; así como para vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y del Código Comicial en materia electoral, además de garantizar la observancia de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia que rigen la función estatal de organizar las elecciones.

Derivado de la existencia de dichas atribuciones explícitas, se advierte la existencia de una facultad implícita consistente en que, para hacer efectivas dichas atribuciones, el Consejo General de este Instituto cuenta con la facultad de prevenir o corregir la comisión de conductas que no se apeguen a las disposiciones legales aplicables que se presenten ante situaciones extraordinarias y de tomar las medidas pertinentes para preservar el respeto a dichos preceptos legales garantizando con ello el debido desarrollo del Proceso Electoral.

Sirve de sustento a lo anterior el criterio orientador emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro y texto a la letra señalan:

<<INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. PARA EL EJERCICIO DE UNA FACULTAD IMPLÍCITA, POR EL CONSEJO GENERAL, REQUIERE DE UNA EXPRESA PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE ÉSTA.—El inciso z), del artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, autoriza al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para dictar los acuerdos necesarios con el objeto de hacer efectivas las atribuciones contenidas en los incisos del a) al y), de ese numeral y las demás señaladas en el propio ordenamiento. Esta facultad implícita requiere la existencia, a su vez, de alguna expresa, a la que tienda hacer efectiva, por cuanto a que, el otorgamiento de la implícita al Consejo General, por el Congreso de la Unión, tiene como aspecto identificadorio la relación de medio a fin entre una y otra. Si el Consejo General responsable del acto recurrido, afirma haberlo emitido en ejercicio de una facultad implícita, pero en realidad no hace efectiva una expresa o explícita, dicho acto carece de la debida fundamentación y motivación, por no existir esa relación de causa-efecto entre los dispositivos legales citados y los hechos a que pretende adecuarse.

Recurso de apelación. SUP-RAP-004/98.—Partido Revolucionario Institucional.—18 de marzo de 1998.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretario: Roberto Ruiz Martínez.

Revista Justicia Electoral 1998, Tercera Época, suplemento 2, página 57, Sala Superior, tesis S3EL 047/98.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 656-657.>>

Así, el Consejo General de este Instituto consideró necesario establecer, en ejercicio de las facultades implícitas, un procedimiento administrativo que sirviera de instrumento para conocer e investigar las faltas cometidas por los partidos políticos y/o coaliciones a las disposiciones establecidas en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, el cual como se hizo mención en el antecedente número IV de este dictamen fue aprobado por el mismo en sesión ordinaria de fecha diecisiete de agosto del año dos mil siete, denominándolo “Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado”.

En este entendido, el Consejo General de este Instituto considerando la disposición contenida en el artículo 108 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, tal como se refirió en el antecedente I de este dictamen aprobó la creación de la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias con la finalidad coadyuvar en el desempeño de sus atribuciones, las cuales han quedado referidas con antelación.

Así, considerando lo dispuesto por el artículo 15 fracción VIII, incisos a), b) y f) del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado, la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias como un órgano auxiliar en las funciones del Consejo General cuenta con las atribuciones de recibir y sustanciar el expediente integrado con motivo de la presentación de una denuncia, en términos del

reglamento correspondiente; elaborar el dictamen correspondiente derivado de las denuncias presentadas, en términos del reglamento correspondiente; y las demás que les confiera el Código Comicial, el Reglamento de Comisiones en cita y el propio Consejo General.

En esa virtud, al ser facultada la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias en el Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado para conocer al respecto, y en términos de lo dispuesto por los artículos 7 fracciones I y III, y 33 del referido Ordenamiento Legal, esta Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias es competente para conocer y emitir el presente dictamen.

2.- Que, del análisis acucioso de las constancias que obran en la denuncia radicada bajo el número DEN-PP-018/07, se desprende que por cuanto hace a la personería del promovente Licenciado José Alfonso Rodríguez Periañez, se le tiene por reconocida en términos de los artículos 42 fracción IV del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 9 y 10 fracción II del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado y en atención a que la constancia que lo acredita como representante propietario del Partido del Trabajo, se encuentran en el archivo del Consejo General de este Instituto.

Por lo que hace a la personería del representante propietario del Partido Acción Nacional, Licenciado Rafael Guzmán Hernández, aún y cuando no dio contestación a la denuncia interpuesta en contra del instituto político que representa, ésta se le tiene por reconocida en términos de los numerales 9 y 16 párrafo segundo del Reglamento en cita, dando contestación a la denuncia en sentido negativo.

3.- Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 fracción VII del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, este Órgano Auxiliar del Consejo General deberá analizar en primer lugar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el numeral 18 de dicho Reglamento, en atención a que su estudio es preferente y de orden público.

Bajo este contexto, esta autoridad auxiliar estima que el escrito de denuncia materia de este dictamen cumplió con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 10 del Ordenamiento Legal en comento, mismo que establece lo siguiente:

ARTÍCULO 10.- La denuncia se interpondrá por escrito ante el Consejo y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Partido político o coalición que denuncia;
- II. Nombre del representante, con firma autógrafa o huella digital;
- III. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- IV. Partido político o coalición denunciado;
- V. La relación clara y sucinta de los hechos en que se motive la denuncia, así como los preceptos presuntamente violados; y
- VI. El promovente deberá ofrecer o aportar las pruebas con que cuente tendientes a demostrar la veracidad de su dicho.

Esto es, la denuncia materia del presente dictamen fue interpuesta por escrito ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el Partido del Trabajo a través de su representante propietario, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como el partido político denunciado; haciendo una relación clara y sucinta de los hechos en que motivaron su denuncia y los preceptos presuntamente violados, ofreciendo y aportando las pruebas que consideró idóneas para demostrar la veracidad de su dicho.

4.- Que, a efecto de entrar al análisis y valoración de los argumentos de hecho y de derecho, los documentos y demás actuaciones contenidas en el expediente, se deberá observar el principio de exhaustividad al que están obligadas todas las autoridades, para efectos de emitir el proyecto de dictamen que en derecho resulte procedente.

Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente:

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. *Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligados a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por mas que le crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en*

la solución de las controversias, que no solo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano. SUP-JDC-010/97. Organización Política Partido de la Sociedad Nacionalista. 12 de marzo de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-067/2002 y acumulado. Partido Revolucionario Institucional. 12 de marzo de 2002. Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 43/2002.

5.- Que, una vez desestimadas las causales de improcedencia resulta conveniente realizar por una parte el análisis de las pretensiones del promovente señaladas en el escrito de denuncia y las negaciones del instituto político presuntamente infractor de la norma, así como la debida valoración de los elementos probatorios que fueron aportados para demostrar la procedencia de sus aseveraciones; análisis y valoración que observarán en todo momento las disposiciones contenidas en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, el Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, el principio de exhaustividad referido en párrafos precedentes y los acuerdos tomados por la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias, a fin de verificar si los actos denunciados son violatorios del artículo 229 del Código de Instituciones y Proceso Electoral del Estado de Puebla, el cual a la letra señala:

ARTÍCULO 229.- Los partidos políticos respetarán mutuamente sus elementos de propaganda. Por lo tanto se les prohíbe la destrucción o alteración de carteles y pintas que sean colocados o escritas en los lugares autorizados, así como la superposición de propaganda sobre la fijada o inscrita por otro partido.

Los poseedores de inmuebles que no hayan dado su autorización para la inscripción o fijación de propaganda podrán retirarla libremente.

En ese sentido, esta Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Reglamento antes mencionado, determinará conforme a los elementos que obren en el expediente, las pruebas aportadas por cada una de las partes, así como demás diligencias y actuaciones que obran en el mismo, sobre la veracidad de los hechos denunciados y en su caso, si los mismos constituyen violaciones al artículo 229 del Código de la materia, disposición electoral señalada por el denunciante.

De igual forma, es de mencionarse que este Órgano Auxiliar no está sujeto o condicionado a los estrictos puntos de hecho referidos en el escrito de denuncia, pues los mismos constituyen simplemente la base indispensable para dar inicio al procedimiento correspondiente, encontrándose facultado para hacer uso de esos poderes con el fin de llegar al conocimiento de la verdad de las cosas, en acatamiento de los principios de certeza y legalidad que rigen la función estatal de organizar las elecciones.

Sirve de sustento a lo anterior el criterio orientador emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual indica:

“ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LOS HECHOS DENUNCIADOS SÓLO SON LA BASE DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN.—Conforme con el artículo 82, párrafo 1, inciso t), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para conocer la verdad de los hechos, es indudable que el ejercicio de la facultad de investigación que tiene el Instituto Federal Electoral, a través del secretario de la Junta General Ejecutiva no está sujeto o condicionado a los estrictos puntos de hecho referidos en el escrito de queja o denuncia. Estos puntos constituyen simplemente la base indispensable para dar inicio al procedimiento correspondiente, pero una vez que el órgano sustanciador determina, prima facie, que tales cuestiones fácticas pueden ser materia de tal procedimiento, dicho órgano está facultado para hacer uso de esos poderes con el fin de llegar al conocimiento de la verdad de las cosas, en acatamiento de los principios de certeza y legalidad que rigen en la materia.

Recurso de apelación. SUP-RAP-009/2000.—Coalición Alianza por México.—21 de marzo de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: David Solís Pérez.

Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, página 178, Sala Superior, tesis S3EL 116/2002.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 806-807.”

Aunado a lo anterior, el procedimiento del cual tiene conocimiento este Órgano Auxiliar es de naturaleza inquisitiva, de tal manera que, presentada la denuncia correspondiente, acompañada de elementos probatorios o de algún principio de prueba, no es indispensable la instancia o conducta impulsora de la parte denunciante, para que la autoridad administrativa electoral realice las diligencias que estime necesarias y recabe mayores elementos de prueba, tendentes a la acreditación de los hechos que motivaron la denuncia.

En tales condiciones, el hecho de que esta Autoridad Electoral, en uso de sus atribuciones despliegue las diligencias necesarias y recabe los mayores elementos de prueba, se realiza en observancia a los principios básicos que son el vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia

electoral, así como que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la normatividad aplicable, los que conducen ineludiblemente a considerar que la investigación iniciada no puede interrumpirse por la falta de elementos para llegar al conocimiento de la verdad de las cosas.

Así las cosas, este Órgano Auxiliar del Consejo General en ejercicio de su facultad investigadora y con el objeto de realizar una investigación exhaustiva de los hechos denunciados, se avocó al análisis del escrito de denuncia que nos ocupa, para determinar las diligencias que se podrían realizar a fin de allegarse de los elementos necesarios que le permitieran dictaminar el presente asunto conforme a derecho, desprendiéndose del mencionado estudio, que el denunciado únicamente se concretó a señalar que "...las brigadas del Partido del Trabajo encargadas de la difusión y colocación de propaganda en su recorrido de rutina en los diferentes puntos de esta ciudad capital, en específico dentro de los límites (SIC) del Distrito Electoral Uninominal 01, del Estado de Puebla, se percataron que el Partido Acción Nacional, sobre puso (SIC) propaganda de su Candidato Antonio Sánchez Díaz de Rivera en la propaganda ya fijada con anterioridad por el Partido del Trabajo...", sin precisar las circunstancias de modo, tiempo, lugar y persona relacionadas con los hechos denunciados, lo que imposibilita a este Órgano Auxiliar del Consejo General el estudio y la posibilidad de determinar la práctica de alguna diligencia o actuación que le permita contar con dichos elementos de convicción y verificar si los hechos denunciados son violatorios del artículo 229 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

Asimismo, esta Comisión de Vigilancia considera prudente establecer un método a fin de entrar al estudio de la presente denuncia, el cual consistirá en:

- Analizar las pretensiones del representante propietario del Partido del Trabajo y las probanzas que ofreció para acreditar la veracidad de su dicho; y
- La adminiculación de las probanzas con los elementos que obran en el expediente.

Es de señalarse, que la finalidad de la aplicación del respectivo método radica en la obtención de los elementos objetivos necesarios que permitan a los integrantes de este Órgano Auxiliar determinar si el Partido Acción Nacional con los hechos denunciados, incumplió o no con lo previsto en el artículo 229 del Código de la materia.

En este tenor, de la lectura integral del escrito de denuncia materia del presente dictamen, se desprende que el promovente considera que el Partido Acción Nacional violó lo dispuesto por el artículo 229 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en atención a que el Partido Acción

Nacional sobrepuso propaganda de su candidato Antonio Sánchez Díaz de Rivera en la propaganda del Partido del Trabajo en diferentes puntos de la Ciudad de Puebla, percatándose de esta situación el día veintidós de septiembre de dos mil siete.

Al efecto, el denunciante con la finalidad de probar los hechos expresados en su escrito de denuncia, ofreció y aportó los siguientes medios de prueba, mismos que se tienen por admitidos por no ser contrarios a derecho:

- 1) Dos impresiones fotográficas; y
- 2) La presuncional.

Dichos medios de prueba serán valorados de conformidad con lo dispuesto por los artículos 358, 359 y 360 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como los diversos 26, 27 y 28 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, los cuales refieren:

“ARTÍCULO 358.- Las pruebas serán:

I.- Documentales Públicas:

- a)** Los documentos que expidan los órganos o funcionarios electorales en ejercicio de sus atribuciones;
- b)** Los documentos que expidan las demás autoridades federales, estatales o municipales, de conformidad con la competencia que la Ley les confiere; y
- c)** Los documentos realizados por quienes se les confiere fe pública y en los que consten hechos que les sean propios.

II.- Documentales privadas, aquellas que no se encuentran contempladas en la fracción anterior, que sean ofrecidas por las partes y sean correspondientes;

III.- Las pruebas técnicas son aquellos medios de producción de imagen y sonidos. El oferente deberá señalar concretamente y por escrito el hecho que intenta probar y las circunstancias de modo, tiempo y persona que se aprecian en la prueba; y

IV.- La Presuncional, que es la deducción que realiza el resolutor partiendo de hechos probados para llegar a la verdad.

ARTÍCULO 359.- Harán prueba plena las documentales públicas. En su caso, se admitirá prueba en contrario.

Tendrán el valor de presunción las documentales privadas y las pruebas técnicas y admitirán prueba en contrario. Harán prueba plena cuando al relacionarlas con los demás elementos que obren en el expediente no dejen dudas sobre la verdad de los hechos.

ARTÍCULO 360.- Para la admisión y desahogo de pruebas que no se encuentran

contempladas en el presente ordenamiento y que fueran ofrecidas por el recurrente, el Tribunal deberá considerar si la prueba es conducente, si no se vulneran los plazos legales fijados para la resolución de los asuntos que son competencia del organismo jurisdiccional electoral y las posibilidades materiales.”

“ARTÍCULO 26.- Las pruebas que podrán presentarse serán las siguientes:

I.- Documentales Públicas:

- a)** Los documentos que expidan los órganos o funcionarios electorales en ejercicio de sus atribuciones;
- b)** Los documentos que expidan las demás autoridades federales, estatales o municipales, de conformidad con la competencia que la Ley les confiere; y
- c)** Los documentos realizados por quienes se les confiere fe pública y en los que consten hechos que les sean propios.

II.- Documentales privadas, aquellas que no se encuentran contempladas en la fracción anterior, que sean ofrecidas por las partes y sean correspondientes al hecho que intenta probar;

III.- Las pruebas técnicas son aquellos medios de producción de imagen y sonidos. El oferente deberá señalar concretamente y por escrito el hecho que intenta probar y las circunstancias de modo, tiempo, lugar y persona que se aprecian en la prueba; y

IV.- La Presuncional, que es la deducción que realiza el resolutor partiendo de hechos probados para llegar a la verdad.

ARTÍCULO 27.- Harán prueba plena las documentales públicas. En su caso, se admitirá prueba en contrario.

Tendrán el valor de presunción las documentales privadas y las pruebas técnicas y admitirán prueba en contrario. Harán prueba plena cuando al relacionarlas con los demás elementos que obren en el expediente no dejen dudas sobre la verdad de los hechos.

ARTÍCULO 28.- Para la admisión y desahogo de pruebas que no se encuentran contempladas en el presente Reglamento y que fueran ofrecidas por el denunciante, la Comisión deberá considerar si la prueba es conducente, la posibilidad y las condiciones materiales para su desahogo.

En el análisis y valoración de dichas pruebas deberá de tomarse en cuenta lo señalado por el artículo inmediato anterior de este Reglamento.”

Por su parte, el partido político denunciado tal y como se desprende de la certificación expedida por el Secretario General de este Instituto de fecha treinta de octubre de dos mil siete, no dio contestación en tiempo y forma legal a la denuncia presentada por el representante propietario del Partido del Trabajo acreditado ante el Consejo General del Instituto, Licenciado José Alfonso Rodríguez Periañez, por lo que en consecuencia, se le tiene al mismo contestando la denuncia materia de este dictamen en sentido negativo, consideración que será tomada en cuenta al momento de dictaminar lo que en derecho proceda.

Esto es, se tiene al Partido Acción Nacional negando todos y cada uno de los hechos que se imputan en su contra, sin aportar ningún elemento de prueba que pudiera acreditar dicha negativa o bien robustecer la presunción derivada de la misma.

Una vez examinado el escrito de denuncia y tomada en consideración la contestación en sentido negativo de la misma por parte del denunciado, a fin de continuar con el estudio de mérito, corresponde entrar al análisis y valoración de las probanzas aportadas por el representante propietario del Partido del Trabajo en el presente procedimiento, con el objeto de verificar si con las mismas se acredita o no su dicho y, en su caso, si los hechos denunciados son violatorios del artículo 229 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

En este entendido, por lo que respecta a los medios probatorios aportados por el denunciante, esta Autoridad Auxiliar considera que:

Por cuanto hace a las dos impresiones fotográficas aportadas por el promovente; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 358 fracción III del Código de Instituciones y Procesos Electoral del Estado de Puebla y 26 fracción III del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, son consideradas como pruebas técnicas, mismas que tendrán el valor de presunción y sólo harán prueba plena cuando al relacionarlas con los demás elementos que obren en el expediente no dejen duda sobre la veracidad de los hechos.

De igual forma, debe mencionarse que el promovente al aportar las pruebas técnicas en comento, no señaló claramente las circunstancias de modo, tiempo, lugar y persona a que hace referencia el artículo 26 antes referido, situación que le resta valor probatorio a las mismas, dejando a esta Comisión de Vigilancia sin los elementos objetivos necesarios para realizar el análisis respectivo con relación a los hechos denunciados.

Bajo este contexto, del contenido de las fotografías en comento se observa lo siguiente:

FOTOGRAFÍA 1

Un cartel colocado en un poste de color gris, del cual se desprende la imagen de medio cuerpo de una persona, el logotipo del Partido Acción Nacional y el texto "Toño Sánchez Díaz de Rivera, Presidente, Toño Sí te escucha". De igual forma, se aprecia que atrás del referido cartel se encuentra colocado lo que al

parecer es un pendón, sin poderse observar su contenido, en virtud de la posición en que fue tomada la fotografía.

Dicha probanza en términos de los artículos 358 fracción III y 359 del Código de la materia, así como 26 fracción III y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, al ser un medio de producción de imagen es reconocida como prueba técnica, la cual no cumple con los requisitos de los artículos 358 fracción III del Código en comento y 26 fracción III del Reglamento en cita, en razón de que el promovente al ofrecerla no precisó las circunstancias de modo, tiempo, lugar y persona, lo que aduce la falta de eficacia de la prueba técnica referida y sólo se genera una presunción a favor del dicho denunciado.

Del análisis a la fotografía antes descrita visible en la foja número tres del expediente, se colige que con dicha probanza no queda acreditado fehacientemente que el Partido Acción Nacional haya realizado la superposición de la propaganda de su candidato Antonio Sánchez Díaz de Rivera sobre la fijada por el Partido del Trabajo, dejando solamente la presunción respecto al dicho de la denunciante.

FOTOGRAFÍA 2

Dos postes de color gris con anaranjado, en los cuales se encuentran colocados un pendón y un cartel de los cuales no se puede apreciar con claridad su contenido, en atención a que la fotografía fue tomada por la parte de atrás de los mismos.

Dicha probanza en términos de los artículos 358 fracción III y 359 del Código de la materia, así como 26 fracción III y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, al ser un medio de producción de imagen es reconocida como prueba técnica, la cual no cumple con los requisitos de los artículos 358 fracción III del Código en comento y 26 fracción III del Reglamento en cita, en razón de que el promovente al ofrecerla no precisó las circunstancias de modo, tiempo, lugar y persona, lo que aduce la falta de eficacia de la prueba técnica referida y sólo se genera una presunción a favor del dicho denunciado.

Del análisis a la fotografía antes descrita visible en la foja número cuatro del expediente, se colige que con dicha probanza no queda acreditado fehacientemente que el Partido Acción Nacional haya realizado la superposición de la propaganda de su candidato Antonio Sánchez Díaz de Rivera sobre la fijada

por el Partido del Trabajo, dejando solamente la presunción respecto al dicho de la denunciante.

Asimismo, debe decirse que el objeto de las pruebas antes referidas radica en la pretensión del oferente de las mismas para acreditar sus afirmaciones hechas en el escrito inicial de denuncia, que para el caso en particular, consiste en la intención de demostrar que el Partido Acción Nacional realizó la superposición de la propaganda electoral de su candidato Antonio Sánchez Díaz de Rivera en la fijada por el Partido del Trabajo, violando con ello lo dispuesto en el artículo 229 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; pretensión que no se ve alcanzada, en atención a que dichos medios de prueba son insuficientes para acreditar la veracidad de los hechos denunciados, ya que de su contenido, no se desprende la superposición de la propaganda del instituto político denunciado, sobre la del Partido del Trabajo.

Por otra parte, en relación con la prueba presuncional ofrecida por el denunciante, de conformidad con lo establecido en los artículos 358 fracción IV del Código Comicial y 26 fracción IV del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, esta Comisión de Vigilancia la tiene por admitida por ser de las reconocidas en dichos Ordenamientos Legales, misma que será tomada en consideración al momento de emitir la resolución que en derecho proceda. Sin embargo, después de analizar todos y cada uno de los elementos que integran el expediente tomándolos como hechos conocidos, para llegar a la verdad de los desconocidos, no se genera en el ánimo de esta Autoridad la certeza de que el Partido Acción Nacional haya realizado la superposición de la propaganda de su candidato Antonio Sánchez Díaz de Rivera sobre la fijada por el Partido del Trabajo, violando con ello lo dispuesto por el artículo 229 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

Del mismo modo, debe considerarse la negación que hace el Partido Acción Nacional de los hechos imputados en su contra, misma que se desprende al haberse hecho efectivo el apercibimiento de tener por contestada la denuncia en sentido negativo.

Asimismo, tal y como ha sido indicado con anterioridad, este Órgano Auxiliar en ejercicio de su facultad investigadora y a efecto de ser plenamente exhaustivo en la investigación de los hechos denunciados, se avocó al análisis del escrito de denuncia materia de este dictamen, verificando que del mismo no se desprenden datos suficientes con relación a los hechos, que le permitieran a esta Comisión ordenar alguna diligencia a fin de allegarse de mayores elementos de convicción para resolver el presente asunto, ello en atención a que el promovente no especificó las circunstancias de modo, tiempo, lugar y persona, concretándose

a señalar que el Partido Acción Nacional sobrepuso la propaganda del ciudadano Antonio Sánchez Díaz de Rivera sobre la del Partido del Trabajo dentro de los límites del Distrito Electoral Uninominal 01, con cabecera en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza.

De lo anterior, este Órgano Dictaminador considera que con las probanzas aportadas por el denunciante y con la adminiculación de las mismas con los demás elementos que obran en el expediente, no quedó acreditado que el Partido Acción Nacional haya realizado la superposición de la propaganda de su candidato Antonio Sánchez Díaz de Rivera sobre la fijada por el Partido del Trabajo, según lo argumentado por el denunciante, por lo que en consecuencia, no existe violación alguna al artículo 229 del Código de la materia.

Cabe señalar, que esta Comisión de Vigilancia para llegar a la determinación antes referida, tomó en cuenta lo siguiente:

- Que en el escrito de denuncia no se plasmaron las circunstancias de tiempo, modo, lugar y persona;
- La falta de aportación de los domicilios en los que se encontraba la propaganda electoral;
- Las pruebas aportadas son insuficientes para acreditar el dicho del denunciante y en las mismas no se aprecia la superposición de propaganda electoral del Partido Acción Nacional sobre la del Partido del Trabajo; y
- La inexistencia de otros elementos de convicción con los cuales se pudiera adminicular las pruebas aportadas por el promovente.

De igual forma, se consideró la negativa de los hechos que se le tiene haciendo al Partido Acción Nacional por no haber contestado la denuncia materia del presente instrumento, misma que genera una presunción en su favor que al contraponerla con la generada en favor del Partido del Trabajo, le resta valor convictivo al dicho del denunciado, así como también se tomaron en cuenta los

De igual forma, se tomaron en cuenta los elementos

Por todo lo anteriormente vertido y expuesto, esta Comisión estima que la carga de la prueba a la que se refiere el artículo 24 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, no se vio satisfecha por el promovente, toda vez que los elementos de convicción aportados no tuvieron la fuerza demostrativa suficiente para acreditar que las afirmaciones expresadas fueran fidedignas.

En consecuencia, esta Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias determina tener por infundados los agravios esgrimidos por el representante propietario del Partido del Trabajo acreditado ante el Consejo General de este Organismo Electoral, Licenciado José Alfonso Rodríguez Periañez, en contra del Partido Acción Nacional.

6.- Que, en atención a lo señalado en el artículo 33 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, los dictámenes que elabore la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias se someterán a la consideración del Consejo General de este Organismo para la emisión de la resolución correspondiente; en tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 10 fracción VI del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado, la Consejera Presidenta de esta Comisión deberá remitir al Consejero Presidente del Órgano Superior de Dirección de este Instituto, el presente dictamen, para que por su conducto, sea sometido al conocimiento del citado Órgano Central y el mismo esté en posibilidad de dictar la resolución correspondiente.

Por lo antes expuesto y fundado, la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias del Instituto Electoral del Estado emite el siguiente:

D I C T A M E N

PRIMERO.- Esta Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias es competente para conocer, tramitar y emitir el presente dictamen, en términos de lo estipulado en los considerandos números 1 y 3 de este documento.

SEGUNDO.- Este Órgano Auxiliar determina que las partes tienen personería para actuar en la presente litis, de conformidad con lo establecido en el considerando 2 del presente dictamen.

TERCERO.- Esta Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias determina declarar infundados los agravios esgrimidos por el representante propietario del Partido del Trabajo acreditado ante el Consejo General de este Organismo Electoral, Licenciado José Alfonso Rodríguez Periañez, en contra del Partido Acción Nacional, en términos del considerando 5 de este documento.

CUARTO.- Sométase a la consideración del Pleno del Consejo General de este Instituto el presente dictamen, para que dicte la resolución conducente, de conformidad a lo dispuesto en el considerando 6 del presente instrumento.

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de la referida Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias, en sesión ordinaria iniciada el día quince de noviembre de dos mil siete.

PRESIDENTA

SECRETARIO

**M. D. ROSALBA VELÁZQUEZ
PEÑARRIETA
CONSEJERA ELECTORAL**

**MTRO. JOSÉ JOEL PAREDES OLGUÍN
CONSEJERO ELECTORAL**

MIEMBRO DE LA COMISIÓN

MIEMBRO DE LA COMISIÓN

**LIC. MIGUEL DAVID JIMÉNEZ LÓPEZ
CONSEJERO ELECTORAL**

**LIC. PAUL MONTERROSAS ROMÁN
CONSEJERO ELECTORAL**